

Los regantes del Tajo-Segura acusan al Ministerio de obviar por razones políticas el uso agrícola y social del agua y advierten de que presentarán alegaciones



Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. EFE

El borrador de **Plan**

Hidrológico del Tajo 2022-

2027 ha provocado una

revolución de los regantes

contra el Ministerio

de **Transición Ecológica**.

Agricultores y ganaderos

ultiman las alegaciones que

presentarán antes del 22 de diciembre porque se sienten perjudicados por la propuesta de incrementar

los **caudales ecológicos** del río con un único objetivo medioambiental que obvia los usos sociales y

económicos que genera ese agua.

Protestas Los regantes avisan al Gobierno: "Nos va a tener enfrente" si reduce el trasvase Tajo-Segura

Política El trasvase Tajo-Segura enfrenta al alcalde de Alicante con la ministra Ribera y con Puig

Hemeroteca Los regantes alertan: con los caudales ecológicos propuestos en el Tajo al trasvase le quedan 5 años

En su propuesta, el ministerio de **Teresa Ribera**, a través de la **Confederación Hidrográfica del Tajo**, propone elevar esos caudales que preservan el ecosistema. En concreto, aumentarlos antes de su paso por **Aranjuez** de los actuales 6 metros cúbicos por segundo hasta los 8 en 2026 y los 8,6 en 2027. Al paso por **Toledo** y **Talavera**, subirían de los 10 metros cúbicos actuales a 17 y 18. Eso, según los regantes, supone un serio varapalo a su actividad.

PUBLICIDAD

Los primeros en alzar la voz han sido los regantes del **trasvase Tajo-Segura**. A ellos les afecta, además, que la lámina de agua embalsada en los pantanos de Entrepeñas y Buendía se eleva de un mínimo de 400 hm³ a 800. Eso conlleva una nueva modificación de las reglas del trasvase que, según el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), **Lucas Jiménez**, pone en peligro toda la actividad agrícola de la cuenta mediterránea. «Es un jaque mate en toda regla a la agricultura y la ganadería. Se obvia que es un tema de Estado y se ponen las necesidades ecológicas por delante de todas las demás», explica a El Mundo.

A sus alegaciones se sumarán también las que formulará la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Tajo, que aglutina 90.000 hectáreas de cultivos en **Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura**. También ellos consideran excesiva esta propuesta avalada por el Ministerio.

BATALLA IDEOLÓGICA

En el transcurso de esta decisión, los regantes del trasvase siguen viendo una batalla ideológica. La eterna 'guerra del agua' con la que llevan lidiando 22 años. «Estamos en una situación de total incertidumbre porque está claro que la ministra no conoce la agricultura del Levante y nos preocupa que el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, se aproveche de eso para elevar esos caudales sin causa alguna», se lamenta Jiménez. Y es que hay estudios, como el del catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Garrote, que considera mal calculados los aportes ecológicos que se deben garantizar.



Protesta de los agricultores de la cuenca sur mediterránea por el recorte del trasvase del Tajo. EFE

Para los regantes del trasvase, este es el segundo varapalo en seis meses. En julio entró en vigor el Real Decreto que modificaba las **reglas explotación del trasvase** y que rebajó los caudales a trasvasar de 38 a 27 hm³ en una situación de nivel 2, cuando en los embalses de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 1.400 hm³. En nivel 3, de excepcionalidad hídrica, el máximo son 20 hm³ y queda a criterio del Ministerio. En esa situación se ha vivido del verano, con trasvases de 12 hm en octubre y 18 en noviembre, 30 en total de los cuales 15 hm³ han sido para abastecimiento. «Hasta ahora hemos vivido de los ahorros, de una Dana que fue un desastre pero que llenó los embalses. Pero a partir de este mes, ya en nivel 2, es cuando notaremos el recorte», asegura. Mientras, los agricultores siguen abonando la tasa de mantenimiento de la infraestructura, 12 millones al año, así como los ciudadanos, que pagan otros seis en sus recibos «venga agua o no».

Esta decisión del Gobierno apenas meses antes de revisar los planes de cuenca la han llevado al Supremo los regantes, la Generalitat Valenciana y la Región de Murcia, así como la **Diputación de Alicante**. Sus servicios jurídicos consideran injustificada la modificación, lo que acarrea "inseguridad jurídica y arbitrariedad" lesiva "para los intereses de la provincia de Alicante".



ABOCADOS A LA DESALACIÓN

La modificación de las reglas y el incremento de los caudales persigue, según el presidente de los regantes, «provocar el miedo para que nos abalancemos a la desalación». «Pero es algo imposible, porque el coste es altísimo», recuerda Lucas Jiménez. La propia ministra Ribera reconoció que era necesario hacer «compatible» el precio del agua desalada con la «capacidad de pago real» de los agricultores. Sin embargo, en el convenio de adhesión que la empresa estatal **Acuamed** negocia con el Sindicato de Regantes para la compra de caudales de la desaladora de Torre vieja fija un precio de partida al que se sumaría el coste de la electricidad. «El agua desalada ronda los 80 céntimos pero, con el precio de la luz, el precio podría llegar a **1,32 o 1,5 euros el metro cúbico** y eso no lo pueden pagar el 99% de los agricultores. La tarifa que proponen es un abuso». Los productores exigen que no se sobrepasen los 30 céntimos, como se aprobó en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura y las negociaciones avanzan a contrarreloj porque el Gobierno quiere tener los convenios firmados antes de final de año.

Más en El Mundo



Condenados injustamente sin más prueba que ...



El yate maldito de los Gucci en el que Don Juan Carlos ...

«Estamos cansados de las promesas electorales al regadío de que va a haber inversiones multimillonarias en desalación, cuando están esperando a que lleguen los fondos europeos de recuperación. Europa pide justificar por qué no se usan las desaladoras y es muy fácil: porque no tienen conexión con todos los usuarios y porque el coste es altísimo e inasumible para una economía de competencia como la nuestra», sentencia el presidente de los regantes.

No ven solución, pero reivindican su «derecho al pataleo» frente a la politización que ven y advierten: «No somos muy optimistas, pero sí confiamos en los tribunales».